

Derecho y Psicología: dos miradas, un mismo propósito

*La comprensión de la conducta humana
como herramienta para una mejor justicia*

Alessandro B. Cámpoli

Abogado

RESUMEN

El Derecho regula conductas humanas, resuelve conflictos entre personas y atribuye consecuencias jurídicas a decisiones, acciones y omisiones. Sin embargo, conocer la norma no siempre permite comprender completamente los procesos humanos que se encuentran detrás de los hechos sometidos a consideración jurídica.

La Psicología aporta herramientas científicas para estudiar conducta, cognición, emociones, memoria, percepción, desarrollo, relaciones interpersonales y comportamiento social. Su relación con el Derecho, por ello, no se limita a la intervención de peritos psicólogos dentro de un proceso judicial. También puede contribuir a comprender cómo una persona recuerda un acontecimiento, cómo toma decisiones, cómo responde ante situaciones traumáticas, cómo se desarrolla un conflicto, qué influencia ejerce un grupo, cómo operan determinados prejuicios y sesgos, y de qué manera las propias personas encargadas de aplicar el Derecho procesan la información que reciben.

Este artículo analiza algunos de los principales puntos de encuentro entre ambas disciplinas: Psicología Clínica y Forense, prueba pericial, memoria y testimonio, infancia, trauma y víctimas, Psicología Social, conflicto y negociación, así como los sesgos cognitivos que pueden influir en la actividad jurídica. Su propósito no es convertir al abogado en psicólogo, sino mostrar cómo el conocimiento psicológico puede ampliar su comprensión de las personas y contribuir a una práctica jurídica más rigurosa, prudente y humana.

PALABRAS CLAVE

Derecho | Psicología | Conducta humana | Psicología jurídica |
Psicología forense | Psicología clínica | Psicología social | Prueba pericial |
Memoria | Testimonio | Sesgos cognitivos | Víctimas | Conflicto

PERSONAS
CONTEXTOS
DECISIONES
CONDUCTA
JUSTICIA

*Más comprensión
para una justicia
más humana*

I. EL DERECHO TRABAJA CON NORMAS, PERO TAMBIÉN CON PERSONAS

Una demanda, una denuncia o una carpeta de investigación pueden presentarse ante el abogado como conjuntos de hechos que deben ser jurídicamente calificados.

Pero esos hechos fueron realizados, observados, recordados, narrados e interpretados por personas.

Y ahí aparece una primera conexión fundamental entre Derecho y Psicología.

El Derecho pregunta qué ocurrió, qué norma resulta aplicable, cuáles son sus consecuencias y qué puede probarse.

La Psicología formula otras preguntas.

ALGUNAS PREGUNTAS DE LA PSICOLOGÍA



¿Cómo percibió una persona aquello que ocurrió?



¿Cómo lo recuerda?



¿Qué influencia tuvo el contexto?



¿Cómo tomó una decisión?



¿Cómo reaccionó emocionalmente?



¿Qué sucede dentro de un grupo?



¿Cómo puede afectar el desarrollo psicológico a la comprensión de determinados acontecimientos?

Ninguna de estas preguntas sustituye al análisis jurídico. Lo complementan.

La Psicología Jurídica comprende precisamente un campo amplio de aplicación del conocimiento psicológico al Derecho. La Psicología Forense constituye una de sus expresiones, pero la interacción entre ambas disciplinas alcanza también la investigación sobre memoria, toma de decisiones, interrogatorios, conducta, procesos sociales y funcionamiento de las instituciones jurídicas.

Por eso, reducir la relación entre Derecho y Psicología a la pregunta “¿necesitamos un perito?” significa observar sólo una parte del encuentro entre ambas disciplinas.

“

Antes de convertirse en un hecho jurídico, todo conflicto es también una experiencia humana.

”

II. COMPRENDER UNA CONDUCTA NO SIGNIFICA JUSTIFICARLA

Ésta es una distinción indispensable.

La Psicología puede ayudar a comprender los procesos que intervienen en determinada conducta.

Comprender no significa justificar.

Tampoco significa sustituir la responsabilidad jurídica por una explicación psicológica.

Una persona puede actuar bajo determinadas emociones, aprendizajes, dinámicas relacionales, presiones sociales o procesos cognitivos y continuar siendo jurídicamente responsable conforme a las reglas aplicables.

El Derecho y la Psicología responden preguntas diferentes.

Una explicación psicológica puede resultar relevante para comprender determinadas circunstancias del hecho, valorar capacidades, analizar afectaciones, estudiar dinámicas de violencia o proporcionar información especializada al proceso.

La consecuencia jurídica, en cambio, corresponde determinarla conforme al ordenamiento.



Comprender una conducta aporta información valiosa.



La valoración jurídica corresponde al Derecho.



Ambas disciplinas se complementan, no se sustituyen.

Esta separación protege a ambas disciplinas.

Evita convertir la Psicología en una explicación universal de cualquier comportamiento y evita también exigir al Derecho respuestas sobre procesos humanos para los cuales no fue diseñado.

III. MEMORIA Y TESTIMONIO: RECORDAR NO ES REPRODUCIR UNA GRABACIÓN

Uno de los aportes más importantes de la Psicología al Derecho se encuentra en el estudio de la memoria.

En la vida cotidiana solemos pensar que recordar consiste en recuperar una especie de grabación almacenada en el cerebro.

No funciona exactamente así.

La memoria humana es reconstructiva. La forma en que una persona codifica, conserva y recupera información puede verse influida por múltiples factores.

El paso del tiempo importa.

También las condiciones en que ocurrió el acontecimiento, la atención disponible, información recibida posteriormente, repetición de entrevistas y características de las preguntas formuladas.



Esto tiene una consecuencia jurídica enorme:

seguridad y exactitud no son necesariamente sinónimos.

Una persona puede encontrarse sinceramente convencida de un recuerdo y, sin embargo, determinados aspectos de éste pueden haber sido afectados por procesos normales de memoria.

La investigación psicológica continúa mostrando la importancia jurídica de estos fenómenos. En 2026, por ejemplo, investigaciones reseñadas por la APA volvieron a advertir sobre el efecto que la exposición repetida a una misma persona puede producir en identificaciones posteriores de testigos.



Esto tampoco autoriza a desconfiar automáticamente de todo testimonio.

Obliga a algo más exigente: examinar cómo se obtuvo.

El Derecho pregunta qué recuerda el testigo. La Psicología obliga también a preguntar cómo llegó a recordarlo de esa manera.



IV. LAS INCONSISTENCIAS NO SON UN DETECTOR AUTOMÁTICO DE MENTIRAS

Otro error frecuente consiste en pensar que un relato verdadero necesariamente permanecerá idéntico cada vez que se narre.

No siempre ocurre así.

Existen diferencias entre contradicciones sustanciales y variaciones compatibles con procesos normales de memoria.

También importa la forma en que una persona fue entrevistada, cuántas veces tuvo que repetir lo ocurrido, cuánto tiempo transcurrió y qué información recibió entre una declaración y otra.



Por eso la Psicología del Testimonio puede aportar conocimientos especializados para analizar las condiciones bajo las cuales se produjo una declaración.

Pero tampoco debe convertirse al psicólogo en un “detector humano de mentiras”.

La evaluación psicológica no permite afirmar mágicamente que una persona dice la verdad porque presenta determinada emoción, conducta o expresión.



El propio Protocolo de la SCJN para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia advierte que determinados indicadores psicológicos no permiten, por sí solos, concluir sobre la credibilidad de un testimonio y que deben considerarse factores como edad, complejidad del episodio, paso del tiempo y repetición de declaraciones.

La prudencia científica resulta aquí tan importante como la jurídica.



V. PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DERECHO: CUANDO EL FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO SE CONVIERTE EN UNA CUESTIÓN JURÍDICAMENTE RELEVANTE

La Psicología Clínica constituye otro gran punto de encuentro.

En determinados asuntos jurídicos puede ser necesario conocer la existencia y características de una afectación psicológica, determinadas capacidades, funcionamiento emocional o consecuencias asociadas a experiencias traumáticas.

Pero el abogado debe distinguir entre escuchar a una persona describir su sufrimiento y realizar una evaluación psicológica profesional.

No son equivalentes.



Escuchar un relato no es evaluar clínicamente.



Una evaluación clínica requiere conocimientos, metodología y competencias propias de la Psicología.

Cuando esa evaluación se realiza con finalidad jurídica aparece, además, una diferencia fundamental: la pregunta no es únicamente clínica.

► **Debe responder a un problema jurídicamente relevante.**

En materia de tortura y malos tratos, por ejemplo, el Protocolo de Estambul contempla expresamente evaluaciones médico-legales de posibles consecuencias psicológicas y exige rigor profesional, documentación y análisis especializado.

Esta distinción es esencial para el abogado.

Conocer conceptos psicológicos puede ayudarle a formular mejores preguntas, detectar cuándo necesita intervención especializada y comprender mejor un dictamen.



No lo habilita para diagnosticar.

VI. LA PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA: QUÉ PUEDE DECIR Y QUÉ NO

Aquí entramos en el terreno más evidente de interacción entre ambas disciplinas.

La persona perita aplica conocimientos científicos, técnicos o especializados para aportar información que excede el conocimiento ordinario del órgano jurisdiccional.

En Psicología pueden existir objetos periciales muy diferentes según la materia y el caso.



Por ello, antes de preguntar “¿qué dijo el psicólogo?”, el abogado debería preguntar: ¿Qué se le pidió evaluar?

El objeto del dictamen delimita el trabajo.

Después importan metodología, entrevistas, instrumentos utilizados cuando correspondan, fuentes de información, integración de resultados y limitaciones.

También debe distinguirse entre el dato obtenido y la inferencia construida a partir de él.

Dato obtenido

Información que se recaba (mediante entrevistas, pruebas, observación, etc.).

Inferencia

Interpretación profesional a partir de los datos.

La Psicología Forense no convierte al perito en juez.

Un dictamen psicológico no debe sustituir la determinación jurídica de culpabilidad, responsabilidad o veracidad que corresponda a la autoridad competente.



Las propias guías especializadas de la APA conciben la práctica forense como aplicación del conocimiento psicológico a cuestiones jurídicas, contractuales y administrativas, con especial atención a competencia profesional, metodología y contexto legal.

Un buen dictamen no invade la función del juez: aporta información especializada para que pueda decidir mejor.

VII. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: EL DERECHO NO PUEDE ESCUCHARLOS COMO SI FUERAN ADULTOS PEQUEÑOS

Pocas áreas muestran con tanta claridad la necesidad de interacción entre Derecho y Psicología.

El desarrollo cognitivo, emocional, lingüístico y social influye en la manera en que niñas, niños y adolescentes comprenden preguntas, recuerdan acontecimientos y expresan experiencias.



Adaptar la intervención jurídica a su edad y grado de desarrollo no constituye una concesión. Es una condición para obtener información de mejor calidad y, al mismo tiempo, proteger sus derechos.

La repetición innecesaria de entrevistas puede producir estrés y afectar las declaraciones. Las preguntas sugestivas pueden introducir dificultades adicionales. Y la valoración debe considerar edad, desarrollo, contexto y características particulares del acontecimiento.

La propia SCJN promueve actualmente formación para operadores jurídicos en Psicología del Testimonio Infantil, memoria, sugestibilidad y protocolos de escucha especializada precisamente para mejorar la valoración de la prueba y evitar revictimización.

“

Aquí la Psicología no debilita la investigación jurídica. Puede hacerla más precisa y más respetuosa de la infancia.

ASPECTOS CLAVE EN LA ESCUCHA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



Considerar su edad y nivel de desarrollo.



Utilizar un lenguaje adecuado y comprensible.



Evitar la repetición innecesaria de entrevistas.



Prevenir preguntas sugestivas.



Valorar el contexto y las características particulares del acontecimiento.

VIII. TRAUMA Y VÍCTIMAS: NO EXISTE UNA ÚNICA MANERA “CORRECTA” DE REACCIONAR

También resulta peligrosa la expectativa de que toda persona que ha vivido un acontecimiento traumático deba comportarse de determinada manera.

No existe una reacción humana universal.

Las respuestas pueden variar considerablemente.



Una persona puede llorar.



Otra puede mostrarse aparentemente distante.



Puede existir dificultad para narrar determinados acontecimientos.



Puede aparecer evitación, activación emocional o alteraciones de diversa naturaleza.



Y ninguna reacción aislada demuestra por sí misma qué ocurrió.

Ésta es una enseñanza especialmente importante para abogados y autoridades: el comportamiento posterior no debe interpretarse mediante estereotipos sobre cómo “debería” comportarse una víctima.

La evaluación especializada puede aportar información sobre consecuencias psicológicas y su posible relación con experiencias investigadas, siempre respetando los límites metodológicos correspondientes. El Protocolo de Estambul, por ejemplo, establece precisamente estándares para evaluar y documentar evidencia física y psicológica en alegaciones de tortura y malos tratos.



El Protocolo de Estambul exige rigor profesional, metodología, documentación y análisis especializado.

Comprender el trauma ayuda a evitar dos extremos igualmente incorrectos:



Considerar que determinada reacción prueba automáticamente el hecho.



O concluir que la ausencia de la reacción esperada demuestra que el hecho no ocurrió.



IX. PSICOLOGÍA SOCIAL: EL INDIVIDUO NO ACTÚA EN EL VACÍO

El Derecho suele individualizar conductas y responsabilidades.

La Psicología Social recuerda que las personas también actúan dentro de grupos, organizaciones, instituciones y contextos culturales.



La autoridad puede influir.



También la presión grupal.



Los estereotipos pueden modificar percepciones.



La pertenencia a un grupo puede afectar interpretaciones y decisiones.



Las dinámicas institucionales pueden normalizar determinadas prácticas.



Y los prejuicios pueden operar incluso sin que quien decide sea plenamente consciente de ellos.

Esta perspectiva resulta útil en materias tan diversas como discriminación, violencia, organizaciones, relaciones laborales, comportamiento institucional, Derechos Humanos y Compliance.



No porque la pertenencia a un grupo elimine la responsabilidad individual.

Sino porque comprender el contexto social permite analizar mejor cómo determinadas conductas aparecen, se mantienen, se toleran o se reproducen.

El Derecho observa a la persona responsable.

La Psicología Social permite observar también el entorno que influye sobre ella.



X. EL ABOGADO TAMBIÉN TIENE SESGOS

Quizá ésta sea una de las aportaciones más incómodas —y más útiles— de la Psicología al Derecho.

Los sesgos cognitivos no pertenecen únicamente a testigos, víctimas o imputados.

También pueden afectar a abogados, fiscales, investigadores, peritos, mediadores y personas juzgadas.



Podemos buscar información que confirme una hipótesis inicial y prestar menos atención a la que la contradice.



Una primera cifra o explicación puede convertirse en un ancla.



Una característica positiva o negativa de una persona puede influir indebidamente en nuestra valoración de otras características.



Aquello que recordamos con mayor facilidad puede parecerse más frecuente o probable de lo que realmente es.



Y una primera impresión puede condicionar la interpretación posterior de información ambigua.

Conocer estos procesos no inmuniza contra ellos.

Pero permite introducir una práctica profesional extremadamente valiosa:



cuestionar nuestras propias conclusiones.

- ▶ ¿Qué evidencia las contradice?
- ▶ ¿Estoy valorando el dato o a la persona que lo proporciona?
- ▶ ¿Mi hipótesis inicial está condicionando las preguntas que hago?
- ▶ ¿Estoy buscando explicación o confirmación?

La Psicología, en este punto, no sirve para analizar al adversario.



Sirve para analizarnos también a nosotros mismos.

DIÁLOGO
TAMBIÉN
ES JUSTICIA

XI. CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN: COMPRENDER INTERESES, NO SÓLO POSICIONES

Muchos conflictos jurídicos no comienzan siendo jurídicos.

Se convierten en jurídicos cuando las personas ya no consiguen resolverlos de otra manera.



Una parte exige dinero.



Otra exige una disculpa.



Alguien reclama una custodia.



Otro insiste en determinado reconocimiento.

Pero detrás de las posiciones expresadas pueden existir necesidades, emociones, percepción de injusticia, temor, pérdida de confianza, identidad, reconocimiento o necesidad de control.



Comprender esas dimensiones no significa abandonar la defensa jurídica. Puede mejorarla.

La negociación y la mediación se benefician de conocimientos sobre comunicación, percepción, escalamiento del conflicto, regulación emocional y toma de decisiones.



Un abogado que identifica únicamente la pretensión jurídica puede perder información relevante sobre aquello que realmente mantiene vivo el conflicto.

En ocasiones, comprender por qué una persona necesita determinada solución permite encontrar alternativas que el expediente, por sí solo, no muestra.

XII. DERECHO Y PSICOLOGÍA: INTERDISCIPLINA NO SIGNIFICA INVASIÓN PROFESIONAL

El encuentro entre ambas disciplinas requiere límites claros.



Un abogado con conocimientos psicológicos continúa siendo abogado.



No diagnostica trastornos.



No realiza evaluaciones clínicas para las que no se encuentra profesionalmente habilitado.



No sustituye a la persona perita.



Y un psicólogo que interviene en un asunto jurídico tampoco sustituye al juez ni determina las consecuencias jurídicas que corresponden.

La verdadera interdisciplinariedad no consiste en que una profesión absorba a la otra.



Consiste en saber qué puede aportar cada una, cuándo necesitamos a la otra y cómo formular preguntas que permitan trabajar conjuntamente.

Eso exige también distinguir entre conocimiento psicológico respaldado científicamente y explicaciones populares sobre conducta que pueden resultar intuitivas, pero carecer de suficiente sustento.



El Derecho gana poco incorporando Psicología si incorpora mala Psicología.

XIII. CONSIDERACIONES FINALES

El Derecho necesita clasificar hechos, atribuir consecuencias, resolver controversias y proteger derechos.

Pero todo ello ocurre entre personas. Personas que perciben, recuerdan, olvidan, sienten, toman decisiones, pertenecen a grupos, que pueden sufrir, que pueden equivocarse y que también pueden interpretar equivocadamente a otras personas.

La Psicología permite aproximarse científicamente a una parte de esa complejidad.

Su aportación al Derecho no se agota en un dictamen pericial ni en el diagnóstico de una afectación psicológica.

Está presente en el estudio de la memoria y el testimonio, la infancia, el trauma, la toma de decisiones, los procesos grupales, los prejuicios, la negociación, el conflicto y los propios sesgos de quienes participan en el sistema jurídico. La amplitud actual de la Psicología Jurídica y Forense refleja precisamente esa interacción entre conocimiento psicológico, práctica jurídica e instituciones.

Esto no significa psicologizar el Derecho.

Significa reconocer que una disciplina dedicada a regular la conducta humana puede beneficiarse del conocimiento científico de otra disciplina dedicada a comprenderla.

Para el abogado, estudiar Psicología no significa dejar de mirar la norma.

Significa aprender a mirar también a la persona que está detrás de ella.

El Derecho establece consecuencias para las conductas humanas. La Psicología ayuda a comprender mejor a las personas que las realizan, las padecen, las recuerdan, las narran y las juzgan.

Entre ambas disciplinas existe una frontera profesional que debe respetarse.

Y quizá ahí se encuentre una de las aportaciones más valiosas de la Psicología al Derecho: recordarle que detrás de cada expediente, cada declaración, cada conflicto y cada decisión jurídica hay personas que perciben, sienten, recuerdan, interpretan y actúan dentro de contextos que también deben ser comprendidos.